

Sin ideología y con moral laxa

El conflicto por el control del Estado.

Por: Gustavo Berganza

Cuando uno otea el panorama social guatemalteco nota que en nuestro país, la clase media y la alta emergente parecen no ser ya los estratos en donde emergen las ideas de avance y mejora social, tal como sucedió hasta la década de 1990.

En esos años, entró a gobernar una generación con conciencia política adquirida en los años sesenta. Esa promoción, fundamentalmente urbana y ladina, se involucró en una insurgencia que, mal que bien, puso sobre la mesa la necesidad de replantear las reglas y las ideas sobre las que se basa el funcionamiento de nuestra sociedad. Se incorporaron al marco referencial las ideas de la democracia participativa, la equidad étnica y de género, la desconcentración y descentralización administrativa, la protección al medio ambiente, la desmilitarización, y se mencionó la necesidad de que el Estado participe activamente en la protección de grupos vulnerables. También se aceleraron procesos de privatización que desmantelaron la capacidad empresarial del Estado.

Lo curioso del caso es que esta transformación se dio en el seno de gobiernos controlados por la oligarquía, que dieron cabida a operadores políticos de clase media y media alta para emprender este rediseño. Lo malo es que en el ínterin también otros integrantes de estos grupos no oligárquicos empezaron a competir con el gran empresariado, adoptando y perfeccionando las tácticas heterodoxas utilizadas por la oligarquía para beneficiarse como contratistas del Estado.

Como ha demostrado el escándalo Rosenberg –que no es sino la manifestación política de una puja de intereses económicos entre la oligarquía y los nuevos empresarios– y el forcejeo para integrar las Comisiones de Postulación, el conflicto por el control del Estado se ha acentuado.

Los nuevos grupos aprendieron de los viejos conglomerados económicos que para redondear el negocio hace controlar el sistema que valida contratos, garantiza su cumplimiento y provee inmunidad a los que “estiran” o “encogen” los términos de su cumplimiento, es decir los tribunales.

A Roberto López Villatoro, uno de los financistas del forcejeo con la vieja oligarquía por el control del Estado, se le estigmatiza por haberse hecho millonario importando zapatos deportivos chinos con marcas pirateadas. López Villatoro ha sido muy hábil en aprender el manejo de los recursos y caminos que fija el sistema para lograr incidir, de manera legal vale la pena aclarar, y se le ataca por la integración de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes de apelaciones. En el pasado reciente, cuando la oligarquía y los militares eran socios y no competidores; quienes integraban el augusta tribunal eran, fundamentalmente, abogados de los bufetes que trabajan para la oligarquía. Hoy, con los grupos que financian López Villatoro y otros empresarios que no son de la rosca tradicional, los nombres que controlarán al Organismo Judicial no serán los del grupo de las Vacas Sagradas.

El forcejeo por el control del poder político ha colocado tres gobiernos que no fueron

directamente controlados por los grandes empresarios: el de Cerezo, el de Portillo y ahora el de Colom. En este sentido, no deja de ser preocupante que en términos de eficacia administrativa y de interés por mejorar la condición de vida de los guatemaltecos, tal la clase media y la clase alta emergente, no se diferencien mucho de la oligarquía. Y ya no digamos en lo que se refiere a la corrupción del Estado y sus instituciones. Aquí pareciera que los grupos emergentes han superado a sus maestros de la vieja burguesía.